

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISION LABORAL

PROCESO	Ordinario
DEMANDANTE	Omaira de Jesús Galvis Duque
DEMANDADO	AFP Protección S.A. y Junta Regional de Calificación de Invalidez
PROCEDENCIA	Juzgado <b>004</b> Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 <b>004 2015 00869</b> 01
INSTANCIA	Segunda
PROVIDENCIA	Sentencia Nro. 234 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Retroactivo pensión invalidez régimen de ahorro individual – dictamen de la Junta Regional y Nacional determinaron PCL el 03 de agosto de 2015 sin que exista prueba para modificar dicha fecha – no retroactiva pensión fue reconocida por fondo – no intereses.
DECISIÓN	Revoca y confirma

En la fecha, **seis (06) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas: María Eugenia Gómez Velásquez, Luz Patricia Quintero Calle, y como ponente, Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento con relación al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de **Omaira de Jesús Galvis Duque**, frente a la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario que promoviera en contra de la **AFP Protección S.A.** y la **Junta Regional de Calificación de Invalidez**. Radicado único nacional 05001 3105 **004 2015 00869** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración el proyecto discutido y aprobado mediante acta N°. **028**, que se plasma a continuación:

## **Antecedentes**

El proceso fue instaurado a fin de que se declarara la nulidad de los dictámenes 21873494 del 03 de octubre de 2012 de Suramericana y el 43097 del 19 de diciembre de 2012 de la Junta Regional de Calificación de Invalidez, y con ello determinar que la actora acredita una pérdida de capacidad laboral del 50%, y así le fuera reconocida y pagada por parte de Protección S.A. la pensión de invalidez, los intereses moratorios establecidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas.

No obstante, debido a la evidencia presentada durante el trámite, se constató que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez el 13 de julio de 2016, le determinó a la señora Omaira una disminución del 50,99% en su capacidad laboral, estructurada el 03 de agosto de 2015, y que con ello la AFP convocada, el 06 de febrero de 2017, le otorgó la pensión de invalidez. Por lo tanto, el proceso continuó, en atención a lo manifestado por la interesada, solo en relación con el reconocimiento del retroactivo a partir del 04 de octubre de 2012, según las peritaciones objeto de nulidad, así como en lo que respecta a los intereses moratorios.

Para respaldar las peticiones, la demandante indicó que nació el 19 de mayo de 1962 y se afilió al régimen de ahorro individual con solidaridad a través de Protección S.A.. El 05 de septiembre de 2012, solicitó a esta entidad el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, siendo remitida a Suramericana para ser evaluada, quien el 03 de octubre de 2012, le determinó una pérdida de capacidad laboral del 37,42%, con fecha de estructuración el 14 de junio de 2012. Experticia que fue objeto de recurso, el cual fue desatado por la Junta Regional de Calificación el 19 de diciembre de 2012, modificando el porcentaje al 43,13% y confirmando la fecha en que se produjo la merma. Alega que, debido a las patologías que padece, las cuales le impiden trabajar, no es posible establecer una pérdida de capacidad

laboral como la determinada por la Junta, y señala que la demora en la concesión de la pensión ha agravado su situación.

En el **auto del 30 de junio de 2015**, se admitió y dio trámite a la acción. Una vez notificadas las demandadas, procedieron a presentar su escrito de contestación, así:

**La Junta Regional de Calificación de Invalidez**, admitió la fecha de nacimiento de la actora y el informe rendido por la entidad, aclarando que, ante una nueva solicitud presentada por la señora Omaira, fue valorada el 11 de agosto de 2015 por Suramérica, y ante la inconformidad presentada ante dicha experticia fue remitida a la Junta determinándole, el 23 de diciembre de 2015, una pérdida del 58,49% de origen común estructurada el 03 de agosto de 2015. Los demás supuestos no le constan. Frente a las pretensiones se opuso solo en lo atinente a la nulidad de la valoración. Finalmente, formuló las excepciones de mérito que denominó: el dictamen de la entidad es plenamente valido, inexistencia de la obligación de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, buena fe, imposibilidad de condena en costas y el estado clínico vario después de la calificación del 2012.

**Protección S.A.**, acepta la vinculación de la demandante a dicho fondo, así como la reclamación de la pensión de invalidez y el contenido de las experticias rendidas. En cuanto a los demás aspectos, argumenta que son apreciaciones subjetivas de parte. **Resistió las pretensiones**, presentando excepciones tendientes a desestimarlas, como inexistencia de las obligaciones demandadas, buena fe, falta de causa para demandar, prescripción y compensación.

La primera instancia concluyó con **sentencia** emitida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito, el 03 de agosto del año en curso, en la que declaró que

la señora Omaira Galvis fue pensionada por invalidez por parte de Protección S.A., ajustándose a lo debido los valores pagados. Condenó a Protección S.A., a reconocer la suma de \$546,527,19 por concepto de indexación frente a las mesadas entre el 03 de agosto de 2015 y el 30 de enero de 2017. Absolvió del pago de los intereses al fondo y de todas las pretensiones a la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Impuso costas a cargo de Protección S.A. en favor de la demandante en la suma de \$800.000,00 y de esta frente a la Junta Regional en la misma cantidad.

Para fundamentar su decisión, el juez argumentó que los dictámenes emitidos por la Junta Regional y Nacional en el 2015 no se incluyeron en el proceso y, por lo tanto, no fueron objeto de controversia. Además, no se vislumbran razones técnicas, científicas, médicas o legales para cambiar la fecha de invalidez establecida por estos, **03 agosto de 2015**, a una calenda diferente. Señaló que estas peritaciones fueron realizadas por médicos expertos, siguiendo los procedimientos establecidos en el manual correspondiente, y se basaron en los registros consignados en la historia clínica y las impresiones diagnósticas, sin contar con la capacidad, ni los conocimientos necesarios para validar la fecha que se solicita por la parte. Por lo tanto, concluyó que no existían elementos para modificar lo determinado por las experticias de 2015 y que, al analizar el cálculo del retroactivo, este se ajustaba a los valores que debían ser pagados.

En cuanto a los intereses moratorios, esbozó que estos representan una compensación por la demora en el pago de la mesada y que, en este caso, no procedían, en tanto, en el momento en que se presentó la demanda, la actora no se consideraba inválida según los certificados presentados como prueba, estableciéndose tal estado solo en el transcurso del proceso con los medios de prueba aportados. Además, resaltó que la sociedad otorgó la pensión de acuerdo a la ley y de manera voluntaria desde 2017. No obstante, ordenó la cancelación de la indexación.

Finalmente, condenó en costas a Protección en favor de la demandante debido a la imposición del pago de la indexación. Asimismo, gravó con estas a la reclamante frente a la Junta Regional de Calificación al haberse desestimado las súplicas dirigidas a esta entidad.

Inconforme el apoderado de la **demandante, formuló recurso de apelación**, manifestando que se debe declarar la nulidad de los dictámenes periciales que determinaron la fecha de pérdida en 2015, debido a inconsistencias con la data de estructuración, la cual, según la prueba presentada, deberá ser determinada para el 14 de junio de 2012. Sostiene que no puede haber dos valoraciones contradictorias sobre el mismo estado de invalidez con datas de merma diferentes.

Además, esbozó que los intereses de mora deben ser reconocidos desde la presentación de la demanda, a pesar de que en ese momento no había un estado de invalidez, según lo ha respaldado el órgano de cierre de la jurisdicción laboral ordinaria. Afirma que el valor del retroactivo más los intereses ascienden a \$17.320.423.

En cuanto a las costas impuestas, arguye que, al haber tenido éxito en la pretensión de indexación, no debería gravarla. En caso de que se confirme la decisión, pide subrogación en el pago ordenado a Protección, para que esta entidad cancele a la Junta el valor establecido.

De la oportunidad para presentar alegatos hizo uso la **demandante**, sosteniendo que no pueden existir dos dictámenes con fechas diferentes de estructuración de la pérdida de capacidad laboral, por tal, de determinarse que no es posible variar la data del 14 de junio de 2012, entonces se debe declarar la nulidad de los experticios que sean contrarios la determinación de merma para el 03 de agosto de 2015. Esgrime que el valor del retroactivo es superior al que se le reconoció y que se le deben otorgar los intereses

moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 desde la presentación de la demanda.

En orden a decidir, basten las siguientes,

### **Consideraciones:**

Como hechos debidamente acreditados y relevantes para resolver en el caso de la señora Omaira de Jesús Galvis Duque, se pueden destacar los siguientes: El 04 de octubre de 2012, Suramericana emitió dictamen en el que le determinó una **PCL del 37,42%, estructurada el 14 de junio de 2012**, experticia frente a la que mostró desacuerdo y, por tal, presentó recurso, el que fue resuelto el 19 de diciembre de 2012 por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, estableciéndole una **merma del 42,13% a partir del 14 de junio de 2012**. El 11 de agosto de 2015, fue evaluada nuevamente por Suramericana, con una **PCL del 39,36% de origen común, estructurada el 03 de agosto de 2015**, decisión frente a la cual se formuló reposición, desatada por **la Junta Regional de Calificación de Invalidez el 23 de diciembre de 2015, aumentando la merma al 58,49% y confirmando la data de estructuración, ya que las secuelas estaban presentes para dicha calenda**. El 13 de julio de 2016, la Junta Nacional de Calificación resolvió la alzada presentada por la AFP y fijó la **pérdida en un 50,99% a partir del 03 de agosto de 2015**. Basándose en esta última calificación, el 06 de febrero de 2017, Protección S.A. le otorgó pensión de invalidez, reconociéndole un retroactivo pensional de \$13.523.755 entre el 03 de agosto de 2015 y el 30 de enero de 2017.

**El problema jurídico** que la Sala debe abordar en este caso, en el marco del recurso de apelación interpuesto, se centra en determinar si la actora cumple con los requisitos legales para el otorgamiento y pago de la pensión de invalidez desde el 14 de junio de 2012, así como los intereses moratorios,

en caso de llegarse a la misma conclusión del a quo, se analizará lo concerniente a la condena en costas a cargo de la misma.

Pues bien, es de indicar que el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, determina que son las Juntas de Calificación de Invalidez, junto con las AFP, las EPS, las ARL y las compañías de seguros que asuman los riesgos de invalidez y muerte, las entidades responsables de valorar, con fundamento en criterios técnicos, médicos y científicos, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, el origen de la misma y su fecha de estructuración. No obstante lo señalado en esta disposición legal, ninguna duda queda que las partes pueden optar por presentar otros experticios a fin de acreditar una pérdida de capacidad laboral o de existir uno emitido por dichas entidades poder reflejar con otro medio de convicción los posibles errores en que pudo incurrir dicha pericia, atendiendo que, en los juicios laborales, al tenor del artículo 51 del C.P.T., son admisibles todos los medios de prueba establecidos por la Ley (SL, 19 oct. 2006, rad. 29622, SL, 27 mar. 2007, rad. 27528, SL, 18 sep. 2012, rad. 35450, SL, 30 abr. 2013, rad. 44653, SL16374-2015, CSJ SL5280-2018, SL4571-2019, SL1958-2021 y SL5694-2021). De acuerdo con ello, las partes tienen libertad probatoria, pudiendo demostrar sus sustentos fácticos por el que les resulte más apropiado, teniendo como único límite los criterios de utilidad, conducencia y pertinencia de la prueba.

Es de advertir que esta discusión es posible, por cuanto dichas experticias *"no tienen la virtud de resolver de manera definitiva las controversias surgidas en torno al grado de invalidez ni de producir efectos de cosa juzgada"*, dado que ello solo ocurre con el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado, que *"implica el desarrollo de una serie de actos procesales que culminan en la expedición de un acto final -la sentencia-, llamado a definir el punto controvertido con fuerza de verdad legal"* (SL1958-2021); no obstante, en este caso, se observa que **la parte demandante no eligió esta opción**. En su lugar, proporcionó tanto el dictamen de Suramericana y de la Junta Regional del 2012, sin allegar ningún otro medio de convicción que respaldara una PCL superior al 50%

estructurada el 14 de junio de 2012. Sin embargo, es relevante señalar que, en la respuesta de la Junta Regional, se incluyó una nueva peritación elaborada por Suramericana en agosto de 2015, en la que se le fijó una merma del 39,36%, de origen común, estructurada el 03 de agosto de 2015 y que tras el recurso interpuesto, la Junta Regional, el 23 de diciembre de 2015, confirmó que los diagnósticos padecidos por la demandante justificaban una pérdida del 58,49%, reafirmando la fecha de estructuración determinada por Suramericana. Tampoco puede desconocerse la valoración realizada por la Junta Regional de Calificación el 13 de julio de 2015, aportada como prueba sobrevenida, en la cual estableció, al analizar el recurso presentado por la AFP, frente al porcentaje de pérdida que el mismo ascendía al 50,99%, lo cual condujo a que Protección S.A. le otorgara la prestación.

En vista de las circunstancias particulares de este caso, la fecha de estructuración que se considera válida es la determinada por la Junta Nacional, en tanto, dicha entidad está autorizada para definir el grado de invalidez, convirtiéndose en el medio apropiado para este propósito. Además, convalidó la fecha proporcionada por otras dos autoridades en el tema, esto es, la Junta Regional y la de Suramericana, la cual fue definida con base en la revisión de la historia clínica, exámenes y en la evaluación que se le realizó a la actora, sin que sea factible modificar ninguno de los aspectos, no solo por carecer los juzgadores de los conocimientos técnicos para hacerlo, sino porque la jurisprudencia especializada es clara en indicar que:

*si en un proceso se encuentran enfrentados dos dictámenes, uno de la Junta Regional y otro de la Nacional, el juez del Trabajo y de la Seguridad Social, en virtud de la libertad probatoria prevista por el artículo 61 del CPTSS, está facultado para escoger lo establecido en el primero o en el segundo, e inclusive ordenar un tercero, **pero el que acoja debe tomarlo en su integridad, esto es, no puede escindirlo y menos configurar uno nuevo con apartes de uno y otros**, así se explica en sentencia SL1021–2019 radicado 62309 del 27 de marzo de 2019*



Por lo tanto, en este caso específico, se considera inalterable la fecha de estructuración, debiéndose indicar, por demás, que dentro del proceso y con el recurso de alzada no se presentaron elementos para tener por establecida la merma para el 14 de junio de 2012, **que si bien es cierto existía no alcanzaba para entonces el 50%, que es el porcentaje exigido para causar la pensión de invalidez, por lo que no hay lugar al retroactivo peticionado, así como a reajustar el concedido por la pasiva, en tanto, una vez realizado el cálculo se obtuvo que fue bien liquidado.**

En lo tocante a los **intereses moratorios**, es importante señalar que a partir de la sentencia SL, 23 sep. 2002, rad. 18512, la Sala de Casación Laboral ha mantenido la postura de que estos deben ser impuestos en casos de retraso en el pago de las mesadas pensionales, sin importar la buena o mala fe del deudor o las circunstancias específicas en torno a la discusión del derecho pensional en las instancias administrativas, teniendo un propósito compensatorio para contrarrestar los efectos adversos que la mora produce en el beneficiario de la pensión. En otras palabras, su carácter es compensatorio y no sancionatorio (sentencias SL2546-2020, SL5673-2021, SL1678-2023).

Sin embargo, para el caso, de acuerdo con los medios de convicción aportados, no se justifica su imposición, en tanto, el dictamen que le determinó la pérdida de capacidad laboral se emitió después de que el proceso se iniciara, y si bien no se desconoce que el mismo tiene fecha 13 de junio de 2016 y el reconocimiento de la pensión se produjo para el 06 de febrero de 2017, también lo es que no existe evidencia que indique que, una vez de que la parte tuvo conocimiento de la experticia, hubiese presentado reclamación ante la entidad tendiente al pago de la pensión de invalidez. Por lo tanto, no hay motivos para considerar que hubo una demora injustificada.

**Finalmente, en cuanto a la condena en costas,** es importante destacar que si bien estas son simplemente una consecuencia procesal del ejercicio de una acción o excepción, lo cual se traduce en un rubro económico que debe asumir la parte que resulte vencida en juicio, otorgando al vencedor el derecho de reintegro de los gastos procesales en los que se haya visto obligado a incurrir (auto Sala de Casación laboral Corte Suprema del 24 de enero de 2007, radicado 31.155, reiterado en sentencia SL 5141-2019- autos CJS AL3132-2017, CSJ AL3612- 2017, CSJ AL5355-2017, CSJ AL2924-2022, CSJ AL2952-2022, CSJ AL5445-2022 y SL1567-2023), también lo es que el numeral 8 del artículo 365 del C.G.P. aplicable por analogía al proceso laboral, establece: "*Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.*", disposición que refleja la intención del legislador de asegurarse de que las costas solo se apliquen en situaciones en las que exista certeza frente a tal gravamen. Además, no es necesario que todas las pretensiones sean reconocidas para que se declare victoriosa a una parte, pues, se considera así si obtiene alguna ventaja sustancial durante el proceso. Así las cosas, al haber tenido éxito la petición de indexación, y las situaciones que se presentaron luego de promovida la acción judicial frente a la calificación de su PCL, la demandante no debe ser condenada en costas en favor de ninguna de las involucradas por pasiva. En consecuencia, se revoca parcialmente el numeral séptimo para en su lugar absolver a la señora Omaira de las costas en favor de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Sin costas en esta instancia al salir avante parcialmente el recurso interpuesto, específicamente frente a este punto.

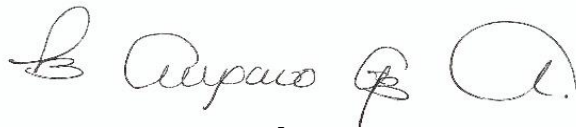
En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca parcialmente el numeral séptimo** de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Omaira de Jesús Galvis Duque**, en contra de la **AFP Protección S.A. y la Junta Regional de Calificación de Invalidez**, para en su lugar absolver a la

actora de las costas impuestas a favor de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. **En lo demás se confirma.**

Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

**Las magistradas** (firmas escaneadas)



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**



**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**